

Contraloría del Estado

Dirección General Jurídica.

Exp. 509/2014-O.

--- **VISTA.** - El suscrito MAESTRO ARTURO CÉSAR LEYVA GONZÁLEZ, hago constar que mediante nombramiento de fecha 1º primero de enero de 2018, fui nombrado Director General Jurídico, por la LIC. MARÍA TERESA BRITO SERRANO, Titular de la Contraloría del Estado; es por lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 7, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, tengo a bien avocarme al conocimiento del presente expediente de Responsabilidad Administrativa, identificado con el número 509/2014-O. -----

ACUERDO.

--- Guadalajara, Jalisco, a 24 veinticuatro de septiembre de 2018, dos mil dieciocho. -----

--- **Visto.** - Tal y como se hace constar que a la fecha no fue posible notificar personalmente al C. Juan Antonio Báez Contreras, el oficio 3742/DGJ-C/2016, circunstancia esta que, impidió hacer del conocimiento el contenido total del oficio mencionado con antelación, al cual se adjuntó la siguiente documentación: -----

1).- Dos acuerdos de fechas 19 diecinueve y 20 veinte de agosto del año 2015, dos mil quince, el primero signado por el entonces Contralor del Estado, Maestro Juan José Bañuelos Guardado, en el cual se ordenó incoar procedimiento sancionatorio en contra del **C. Juan Antonio Báez Contreras**, y el segundo por el cual consta el avocamiento del entonces Director General Jurídico, así mismo del auto de avocamiento de fecha 20 veinte de junio de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por la LIC. MARIA TERESA BRITO SERRANO, titular de la Contraloría del Estado. -----

2).- Copia simple del memorando número 714DGJ/DATSP/2014, de fecha 23 veintitrés de mayo de 2014, dos mil catorce; así como de la documentación que integra el expediente en que se actúa, consistente en copias simples de: a).- Copia certificada del oficio DGCOBAEJ 3645/13, de fecha 12 doce de noviembre de 2013 dos mil trece, que suscribe el en ese entonces, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, Mtro. Álvaro Valencia Abundis, mediante el cual remite la información respecto de los movimientos de personal obligado a presentar declaración de situación patrimonial correspondiente al mes de junio, julio y agosto del año 2013, dos mil trece, entre los que se encuentra la baja del referido, al cargo de Jefe de Materia del Colegio de Bachilleres, b).- Formato de bajas del padrón de obligados a presentar la declaración de situación patrimonial, donde se refiere su baja, a partir del 02 dos de octubre de 2013 dos mil trece. -----

--- En esa tesitura y dado que las diligencias ordenadas y practicadas por esta Contraloría del Estado, a efecto de la localización del C. Juan Antonio Báez Contreras, resultaron infructuosas, tal y como consta en actuaciones pues se levantó acta circunstanciada por parte de personal adscrito a esta Dirección General Jurídica, y en la cual se asentó que una vez constituido en el domicilio



Contraloría del Estado

que del cual se tenía registro, por parte de esta autoridad del encausado, en el mismo no pudo ser localizado, por lo que no se pudo efectuar el respectivo emplazamiento; es por lo que ante la imposibilidad material para emplazarlo, a efecto de que hiciera valer su derecho de audiencia y defensa en cuanto a la imputación efectuada en su contra, *resulta conducente entrar al estudio de la prescripción en los términos siguientes:* -----

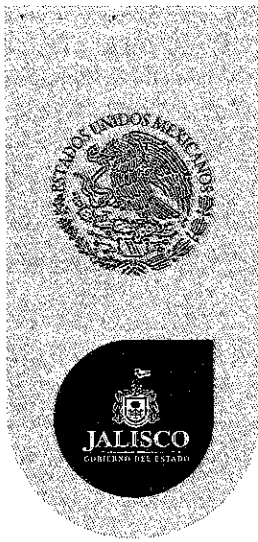
--- Por principio de cuentas se debe de tomar en cuenta que el inicio del presente procedimiento administrativo fue con fecha 03 tres de noviembre de 2013, dos mil trece; luego entonces, es evidente que ha transcurrido en demasía el término prescriptivo previsto en el artículo 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, lo anterior es así, porque sin el ánimo de prejuzgar sobre la falta cometida, se hace referencia al precepto en examen, en los siguientes términos:

El dispositivo jurídico en cita prevé las facultades para hacer exigible la responsabilidad administrativa de los servidores públicos el que distingue los supuestos siguientes:

- a). - 30 treinta días hábiles para la imposición del apercibimiento y la amonestación.
- b). - 6 seis meses si el daño causado no excede de cincuenta veces el salario mínimo vigente en la zona metropolitana de Guadalajara o si la responsabilidad fuere leve y no estimable en dinero
- c). - **3 tres años con 3 tres meses en los demás casos.**

--- Ahora bien, en el asunto que nos ocupa la falta imputada al encausado se considera grave, toda vez que el legislador estatal, previó que con objeto de transparentar los ingresos lícitamente obtenidos por quienes se desempeñan en el servicio público, fueran objeto de revisión para evaluar la evolución patrimonial de los que se encuentran en tal supuesto, con objeto de detectar incrementos que no sean acordes con las percepciones lícitas de aquellos, por ende encuadra en el supuesto hipotético considerado en el inciso c), esto es, opera a partir de los 03 tres años con 03 tres meses, contados a partir del día siguiente de cometida la falta, razón por la cual la facultad de ésta Contraloría del Estado de Jalisco, para exigir la responsabilidad administrativa en el presente asunto **SE ENCUENTRA PRESCRITA** toda vez que como se puede observar a partir de la fecha en que cometió la falta el encausado esto es el día 02 dos de noviembre de 2013, dos mil trece al día de hoy han transcurrido 04 cuatro años con 10 diez meses, por ello es inconcuso que en éste caso, se actualizó el presupuesto establecido en el artículo 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco vigente al momento en que se suscitaron los actos denunciados, que a la letra señala lo siguiente:

"Artículo 65. Las facultades para exigir la responsabilidad administrativa prescribirán en seis meses si el daño causado no excede de cincuenta veces el salario mínimo vigente en la zona metropolitana de Guadalajara o si la responsabilidad fuere leve y no estimable en dinero. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiere cesado si fuere de carácter continuo. En los demás casos, prescribirán en tres años



Contraloría del Estado

con tres meses. Prescribe en treinta días hábiles la atribución del superior jerárquico de la dependencia de que se trate, sobre la imposición del apercibimiento y la amonestación. La prescripción contará a partir del día siguiente del acto irregular a sancionar.

Los términos de prescripción se interrumpirán cuando se practique el procedimiento de investigación administrativa para comprobar la infracción y de ello queden constancias fehacientes, sin pasar del límite de tiempo establecido por el artículo 84 de esta ley."

--- Aunado a lo expuesto con antelación, no es óbice mencionar que para esta Autoridad resulta la obligación de sujetarse a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al término de la prescripción otorgado para poder imponer sanciones por responsabilidades de los servidores públicos, criterios en los cuales el máximo Órgano de Justicia de la Nación ha sostenido que el **termino para la prescripción de la facultad sancionadora del Estado se interrumpe con la incoación del procedimiento de responsabilidades de los servidores públicos, el cual se inicia con la notificación al incoado.** Circunstancia que según actuaciones aún no acontece.

Robustece lo anterior la Tesis Jurisprudencial. 13º. A.83 A, consultable en la página 1404, Tomo XX, diciembre de 2004,

Época: Novena Época
Registro: 179820
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XX, Diciembre de 2004
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.13o.A.83 A
Página: 1404

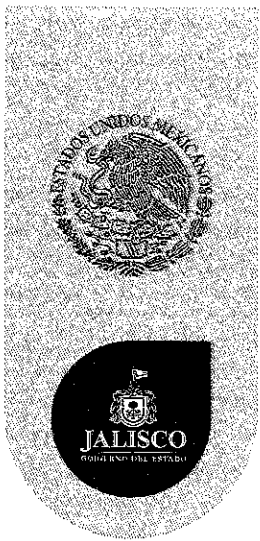
PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES PARA IMPONER SANCIONES POR RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SE INTERRUMPE AL EFECTUARSE LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.

*Del estudio correlacionado de los artículos 64, fracción II y 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se desprende que **el término para la prescripción de la facultad sancionadora del Estado se interrumpe con el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades de los servidores públicos** que prevé el mencionado artículo 64, **el cual se inicia con la notificación de la citación a una audiencia**, en la que se les harán saber las responsabilidades que se les imputan, así como su derecho a ofrecer pruebas; por otro lado, por notificación debe entenderse el hacer saber una resolución de la autoridad con las formalidades preceptuadas para el caso, de lo que se colige que su finalidad es, por una parte, que el servidor público tenga conocimiento de la instauración de ese procedimiento y, por otra, que se interrumpa el plazo de prescripción aludido, efectos que se perfeccionan en el momento en que éste se hace sabedor del procedimiento incoado en su contra. Por tanto, al perfeccionarse el objeto de la notificación con el conocimiento por parte del servidor público de la citación a la audiencia, debe considerarse que en ese momento se interrumpe el término de prescripción, y no a partir de que surta efectos la notificación, en términos de la legislación penal federal de aplicación supletoria en la materia, porque de estimarse así, se estaría disminuyendo el plazo para que la autoridad ejerza su función sancionadora.*

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 82/2004. Manuel Guillermo Berlanga Juárez y otro. 31 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Luz Cueto Martínez. Secretario: Iván Guerrero Barón.

En este sentido se advierte que en el caso que nos ocupa, ha transcurrido en demasía el término previsto en el artículo 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, de 03



Contraloría del Estado

Dirección General Jurídica.

Exp. 509/2014-O.

tres años con 03 tres meses, ya que al encausado a la fecha no se le ha notificado de la incoación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa que nos ocupa, que dicho sea de paso fue por causas ajenas a esta autoridad y que han quedado descritas en líneas que anteceden; transcurriendo un plazo de 04 cuatro años con 10 diez meses, por lo cual se colige que la facultad por parte de esta autoridad para sancionar han **PRESCRITO**, y por ende resulta ocioso la continuidad del procedimiento que se estudia. Esto concatenado en lo previsto en las siguientes Jurisprudencias.

Época: Novena Época

Registro: 163051

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXXIII, Enero de 2011

Materia(s): Común

Tesis: 2a./J. 154/2010

Página: 1051

PRESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SI SE ALEGA EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE ACTUALIZÓ AQUELLA Y NO SE ADVIERTE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE HAYA OCUPADO DE TAL ASPECTO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SE ESTUDIE.

Conforme a los artículos 113 y 114, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos -federal y del Estado de Jalisco-, el servidor público no tiene la carga procesal de alegar la prescripción de la facultad sancionadora durante el procedimiento respectivo, en tanto que sólo constituye una posibilidad de defensa que tiene a su alcance, por lo que puede exponer dicho aspecto en el juicio de amparo, a pesar de que no lo haya realizado ante la autoridad administrativa, en cuyo caso el Juez de Distrito no debe calificar de inoperantes los conceptos de violación relativos, pero tampoco estudiar el fondo de la problemática, acorde con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, sino conceder el amparo para el efecto de que la responsable examine esa cuestión.

Contradicción de tesis 218/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Décimo Quinto en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 8 de septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

Tesis de jurisprudencia 154/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinte de octubre de dos mil diez.

Época: Novena Época

Registro: 176639

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXII, Noviembre de 2005

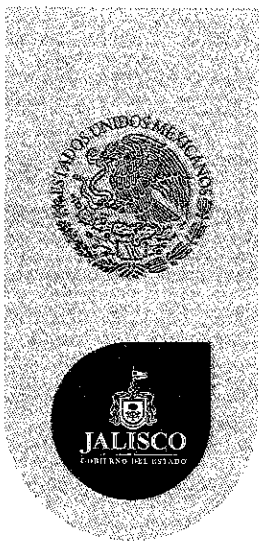
Materia(s): Administrativa

Tesis: 2a./J. 137/2005

Página: 53

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 78, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO SE INTERRUMPE CUANDO ANTE LA EXISTENCIA DE VICIOS FORMALES SON DECLARADOS NULOS EL ACTO QUE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO Y LA CITACIÓN CORRESPONDIENTE.

Conforme al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 203/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 596, el plazo de prescripción a que se refiere el artículo 78, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se interrumpe con el inicio del procedimiento administrativo previsto en el artículo 64 del indicado ordenamiento, mediante la citación al servidor público a la audiencia relativa; sin embargo, cuando ante la existencia de vicios formales dicho acto es declarado nulo, las consecuencias que



Contraloría del Estado

Dirección General Jurídica.

Exp. 509/2014-O.

produjo respecto del plazo de prescripción desaparecen, en tanto que el acuerdo de inicio y la citación para audiencia quedan reducidos a la nada jurídica, como si no hubieran existido, pues estimar lo contrario conllevaría eximir a las autoridades sancionadoras de sujetarse a las normas que regulan su actuación, en clara contravención al principio de legalidad que las rige. Por ende, es inconcuso que las consecuencias de la nulidad del acto de inicio del procedimiento sancionador debe soportarlas la autoridad, por ser quien transgredió el marco legal que rige su actuación y no el servidor público investigado que impugnó dicho acto y obtuvo resolución favorable. En ese sentido, si bien es cierto que el acto de inicio del procedimiento administrativo que resultó viciado evidencia la intención de las autoridades de ejercer su facultad sancionadora, también lo es que al declararse nulo no produce efecto legal alguno y, en consecuencia, para la interrupción del plazo de prescripción a que se refiere el mencionado artículo 78, fracción II, deberá considerarse, en su caso, la nueva citación al servidor público a la audiencia de ley respectiva.

Contradicción de tesis 95/2005-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito (actualmente Segundo en Materias Administrativa y Civil del referido circuito). 30 de septiembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.

Tesis de jurisprudencia 137/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de octubre de dos mil cinco.

Nota: La tesis 2a./J. 203/2004 citada, aparece publicada con el rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. UNA VEZ INTERRUMPIDO EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD, EL CÓMPUTO SE INICIA NUEVAMENTE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO."

Aunado a lo anterior sirve para apoyar lo antes expuestos los siguientes criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación los cuales se transcriben para una mayor comprensión de las mismas:

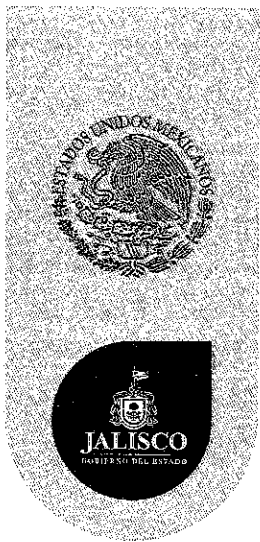
"Época: Novena época. Registro: 165711 Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 200/2009. Página: 308.

PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO PARA QUE OPERE INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA RESPONSABILIDAD O A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE ÉSTA HUBIERE CESADO, SI FUESE DE CARÁCTER CONTINUO (LEGISLACIONES FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y DE GUERRERO). *Los artículos 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas; 75 de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, disponen que el plazo para que opere la prescripción para imponer sanciones a los servidores públicos inicia a partir del día siguiente al en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que ésta hubiere cesado, si fuese de carácter continuo, por lo que para computar el plazo de la prescripción es irrelevante la fecha en que las autoridades tuvieron conocimiento de la conducta infractora del servidor público a quien se pretende sancionar.*

Contradicción de tesis 382/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Primero del Vigésimo Circuito y Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García Villegas. Tesis de jurisprudencia 200/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del once de noviembre de dos mil nueve." (sic)

"Época: Décima época. Registro: 2006420. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Administrativa. Tesis: VI.1o.A.68 A (10a). Página: 2122.

--- Razón por la cual, visto lo anteriormente expuesto y de manera fundada y motivada, **resulta procedente ordenar el archivo definitivo del presente asunto como totalmente concluido, al quedar acreditado que las facultades para exigir la responsabilidad administrativa en contra del C.**



Contraloría del Estado

Juan Antonio Báez Contreras, por parte de esta autoridad han quedado prescritas. -----

--- Así lo acordó y firma el Director General Jurídico de la Contraloría del Estado, de conformidad a lo previsto en los artículos 35 y 38 fracciones VI, VII y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; así como los arábigos 1 fracciones I, II, III, V y VII, 2, 3 fracción VIII, 4, 61 fracción XXVII, 62, 65, 67 fracción II, 68, 72, 87 fracción V, 96 fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, así como 98 de citado ordenamiento legal vigente hasta el día 31 de diciembre de 2013; de conformidad a lo dispuesto por los artículos transitorios PRIMERO y SEGUNDO fracción I de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el 26 veintiséis de septiembre del 2017 y vigente a partir el 27 veintisiete de septiembre del mismo año. -----

Mtro. Arturo César Leyva González.
Director General Jurídico

Testigos de Asistencia.


Lic. Rubén Limón Gutiérrez


Lic. Zuleika Rodríguez Balderas.

"2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara".